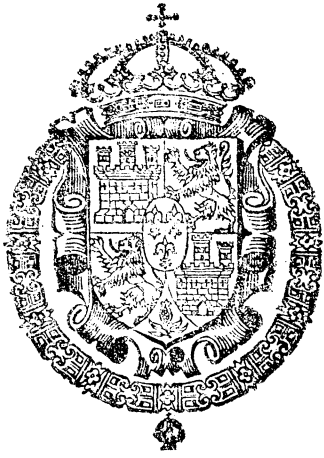


PUNTOS DE SUSCRICION.

Madrid, en la Administracion de la Imprenta Nacional, calle del Cid, núm. 4, segundo.
PROVINCIAS, en todas las Administraciones principales de Correos.
LOS ANUNCIOS Y SUSCRICIONES PARA LA GACETA se reciben en la Administracion de la Imprenta Nacional, calle del Cid, número 4, segundo, desde las doce de la mañana hasta las cuatro de la tarde, todos los días ménos los festivos.



PUNTO DE SUSCRICION

Table with subscription rates: MADRID, PROVINCIAS, BALEARES Y CANARIAS, ULTRAMAR, ULTRAMARINE. Prices range from 5 to 45 pesetas.

El pago de las suscripciones será adelantado, no admitiendo sellos de correos para realizarlo.

GACETA DE MADRID.

PARTI OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el REY D. Alfonso y la REINA Doña María Cristina (Q. D. G.), continúan en el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan SS. AA. RR. las Serenísimas Señoras Princesa de Asturias, é Infantas Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

JUNTA DE SENADORES Y DIPUTADOS

PARA EL SOCORRO DE LAS PROVINCIAS INUNDADAS.

Suscripcion nacional para el socorro de las desgracias ocasionadas por la inundacion (1).

Table listing donors and amounts for flood relief. Includes names like Mr. M. Duhamel, Mr. Pe de Arros, etc., with amounts in Francos and Céntos.

(1) Véase la GACETA del 24 del actual.

Franco Cent.

Table with names and amounts: Mme. Burdon (3), Monseñor el Obispo de Pamiers (200), TOTAL de la primera lista del Viceconsulado de España en Foix (510).

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ÓRDENES.

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente relativo á la anulacion de varios artículos de las Ordenanzas municipales del pueblo de Villarrubia de los Ojos, la Seccion de Gobernacion de dicho alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: El Gobernador de Ciudad-Real propuso á V. E. en 12 de Diciembre de 1878 que se sirviese anular varios artículos de las Ordenanzas municipales de Villarrubia de los Ojos, que habian sido aprobados por aquel Gobierno, de acuerdo con la Comision provincial y Diputados residentes en la capital, porque contravenian á diferentes disposiciones de carácter general.

Pero despues acudió á ese Ministerio el Alcalde de la referida villa quejándose de que el Gobernador dictaba resoluciones que estaban en desacuerdo con las Ordenanzas de la localidad, y pidiendo que, interin V. E. no acordase la anulacion de los artículos cuya supresion habia propuesto el Gobernador, se atuviese á lo que aquellos determinan.

Pedido informe al Gobernador acerca de esta instancia, y habiéndolo emitido despues de oir á la Comision provincial, en Real orden de 10 de Abril último se pasó el expediente á la Seccion, que entien de que en el estado actual del asunto no es ese Ministerio el llamado á dictar la resolucion propuesta por el Gobernador.

Con arreglo al art. 76, párrafo segundo, de la ley municipal vigente, el Gobierno sólo puede entender en las cuestiones relativas á las disposiciones contenidas en las Ordenanzas municipales, de los pueblos cuando, habiendo discordia entre el Gobernador y la Diputacion provincial respecto á su aprobacion, el Ayuntamiento insiste en su acuerdo; caso que no guarda ni analogia siquiera con el que ha motivado la formacion del expediente.

Las Ordenanzas municipales fueron aprobadas por el Gobernador, de acuerdo con la Comision provincial y los Diputados residentes en la capital; y aunque es de sentir que ántes de adoptar aquella resolucion no se examinasen con mayor detenimiento todas las disposiciones que la formaban, porque de esta suerte se hubiera evitado que algunas de ellas no se conformasen con otras de carácter general y obligatorio, no parece que esta circunstancia justifique la intervencion del Gobierno sino en el sentido que la Seccion va á exponer.

Segun el art. 9.º de la ley provincial, los Gobernadores son los encargados de hacer que se cumplan las leyes y disposiciones generales; y una vez que el de Ciudad-Real encierra que las Ordenanzas de la villa de que se trata no se atemperan á algunas de ellas, el único medio que la Seccion halla para que las infracciones sean corregidas sin que el Ayuntamiento quede privado del derecho que le otorga el art. 76 de la ley orgánica, como quedaria si desde luego de Real orden se introdujesen reformas en las Ordenanzas, es que vuelvan éstas á la Diputacion provincial para que, despues de examinarlas detenidamente, emita informe, con el cual podrá el Gobernador conformarse ó no, segun estime procedente; y si se ofrece el caso previsto en el párrafo segundo de la disposicion legal mencionada, y el Ayuntamiento persiste en su acuerdo, será ocasion elec-

var el expediente á ese Ministerio para que lo resuelva en definitiva.

Opina, por tanto, la Seccion que V. E. debe servirse devolver el expediente al Gobernador para que con toda la urgencia posible, á fin de que no pueda haber lugar á reclamaciones de la índole de la producida por el Alcalde, lleve á efecto lo que se indica en el cuerpo del dictámen.

Y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S., con devolucion del expediente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1880.

ROMERO Y ROBIEDO.

Sr. Gobernador de la provincia de Ciudad-Real.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Manzanares contra una providencia de V. S., relativa á la adquisicion de ciertos terrenos de la antigua huerta del Molinillo con destino á via pública, las Secciones reunidas de Gobernacion y Fomento de dicho alto Cuerpo han emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: D. Francisco Mitjana de las Doblas pidió permiso al Ayuntamiento de Málaga en 23 de Noviembre de 1876 para edificar, con arreglo al plano que acompañaba, en la huerta del Molinillo, de que era dueño, comprometiéndose á ceder gratuitamente á la Municipalidad 6.425 metros de terreno para via pública, siempre que se le abonase el importe del que tenia que ocupar las calles marcadas en el plano con los números 1, 2, 3 y 4, que serian unos 2.460 metros.

El Ayuntamiento, previa audiencia del Arquitecto municipal, que hizo algunas observaciones al proyecto, y de conformidad con el dictámen de la Comision de ornato, en 7 de Diciembre de 1876 accedió á la instancia de Mitjana.

Posteriormente, en 6 de Setiembre de 1877, la Municipalidad, á peticion del mismo interesado, resolvió suprimir algunas de las calles que figuraban en el proyecto. Despues de esto dos peritos, nombrados el uno por el Ayuntamiento y el otro por Mitjana, procedieron á la tasacion de los terrenos que debia pagar la corporacion.

No habiendo habido conformidad en las apreciaciones de tales facultativos, designó el Alcalde un tercero para que dirimiese la discordia; y el Ayuntamiento, aceptando el parecer de este y el de la Comision jurídica, acordó por mayoría en 2 de Mayo de 1878 satisfacer á Mitjana 46.191 pesetas 50 céntimos, importe de los 2.496 metros 84 decímetros de terreno que quedaban para via pública, á razon de 18 pesetas 50 céntimos el metro.

Entonces D. Pedro Manzanares Llorente se alzó ante el Gobernador solicitando la revocacion de este acuerdo por ser perjudicial á los intereses públicos, porque contravenia á la Real orden de 11 de Mayo de 1853, y porque aun en el caso de que procediera la indemnizacion, el expediente no se habia tramitado con arreglo á la ley de ensanche de poblaciones de 23 de Diciembre de 1876.

Ampliado el expediente con varios datos, el Gobernador, separándose del dictámen de la Comision provincial, declaró improcedente el recurso, fundado en que por virtud del acuerdo de 7 de Diciembre de 1876 el Ayuntamiento quedó obligado á indemnizar á D. Francisco Mitjana del valor del terreno que este no cedia gratuitamente: en que la ley de 23 de Diciembre de 1876 no es aplicable al expediente, por cuanto se refiere tan sólo al ensanche de las poblaciones, entendiéndose por tal la incorporacion á los pueblos de los terrenos que constituyen sus afueras, y la huerta del Molinillo se halla dentro de la localidad: en

que aun cuando por el acuerdo de 7 de Diciembre de 1876 se variasen las alineaciones aprobadas en Real orden de 22 de Marzo de 1866, conforme á la de 4 de Enero de 1879, el Ayuntamiento no se excedió de sus facultades: en que no habiendo sido reclamado dicho acuerdo en el plazo marcado por la ley, causó estado en el orden administrativo; y en que el acuerdo de 2 de Mayo de 1878, contra el cual se entabló la alzada, sólo sería revocable en el caso de que por él no se hubiese confirmado, como se confirma, el derecho que el de 7 de Diciembre de 1876 creó á favor del propietario de los terrenos.

No aquietándose D. Pedro Manzanarés con esta resolución, suplica á V. E., por las razones que expone, que se sirva dejarla sin efecto, así como el acuerdo del Ayuntamiento de 2 de Mayo de 1878, y mandar que si D. Francisco Mitjana ha percibido la cantidad que por tal acuerdo se le mandó abonar, la devuelva á las arcas municipales.

Sabido es que el art. 67 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1870, que era la que regia cuando el Ayuntamiento aceptó en 7 de Diciembre de 1876 la proposición de D. Francisco Mitjana, reconocía como de la exclusiva competencia de tales corporaciones todo lo relativo á la apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de comunicación, y que por el art. 161 se concedía recurso de alzada para ante la Comisión provincial á cualquiera que se creyese perjudicado por la ejecución de los acuerdos de tal índole, siempre que contuviesen alguna infracción de la referida ley ó de otras especiales.

La ley de bases de 16 de Diciembre de 1876 estableció que tales recursos procedían ante el Gobernador, y que habían de contablarse dentro de los 30 días siguientes á la notificación, ó en su defecto de la publicación de los acuerdos; y en Real orden de 30 de Julio de 1879 se declaró que para los acuerdos adoptados antes de la promulgación de dichas bases, los 30 días tenían que contarse desde la fecha en que se llevó á cabo tal solemnidad.

Aplicando, como corresponde, esta jurisprudencia al caso del expediente, y teniendo en cuenta que el acuerdo de 7 de Diciembre de 1876, en cuanto por él fué aprobado el plano presentado por D. Francisco Mitjana, y aceptada la cesión de los terrenos ofrecidos por este gratuitamente, recayó en materia de la exclusiva competencia del Ayuntamiento, hay que reconocer que por más vicios ó infracciones que contenga, y desde luego parece que se faltó al requisito esencial de exponer al público el proyecto durante 20 días por si á quien quería reclamar contra él, no podía ser apelado en Mayo de 1878, porque no habiéndose recurrido contra él dentro de los 30 días siguientes á la publicación de la ley orgánica en el *Boletín oficial* de la provincia, y siendo indudable que D. Pedro Manzanarés debía conocerlo, puesto que formaba parte de la Municipalidad, tal acuerdo quedó firme y ejecutorio en las dos partes de que se ha hecho mérito.

Cierto es que ni en el recurso al Gobernador ni en el elevado á ese Ministerio se pide taxativamente la revocación del acuerdo de 7 de Diciembre de 1876, sino la del adoptado en 2 de Mayo de 1878; mas como este fué consecuencia precisa del primero, puesto que en él se limitó el Ayuntamiento á señalar la cantidad que había de abonar á D. Francisco Mitjana por los terrenos que tenían que ocupar las calles señaladas en el plano con los números 1, 2, 3 y 4, no podía impugnarse sin impugnar al mismo tiempo una resolución que gubernativamente era ya irreformable.

Han dicho las Secciones que el acuerdo de 7 de Diciembre de 1876 sólo era firme y ejecutorio en cuanto por él se aprobó el plano de edificación de la huerta del Molinillo, y se aceptaron los terrenos ofrecidos gratuitamente por el dueño de esta finca, porque con arreglo á las disposiciones vigentes no podía adquirir tales caracteres la parte relativa á la compra de terrenos mientras no lo aprobase el Gobierno de S. M.

Por el art. 80 de la ley municipal de 20 de Agosto de 1870, reemplazado por el 85 de la vigente, se halla establecido que los Ayuntamientos necesitan estar autorizados por el Gobierno para celebrar contratos que afecten á los bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Deuda pública.

En la regla 2.ª de la Real orden de 25 de Abril de 1879, inserta en la GACETA DE MADRID de 26 del mismo mes y año, que tuvo por objeto fijar la inteligencia del mencionado art. 85, se dice que la adquisición de terrenos y de fincas, y todos los contratos de los demás bienes inmuebles, derechos reales etc., no serán válidos sin la aprobación del Gobierno.

No se comprende, pues, cómo el Ayuntamiento entendió que bastaba su acuerdo para ultimar el contrato de compra-venta pactado con D. Francisco Mitjana, porque si bien en las épocas en que se ocupó del asunto no se había publicado la Real orden que acaba de invocarse, el texto legal á que la misma se refiere es tan explícito, que no debió haberle duda alguna acerca del particular; y una vez que al publicarse aquella el expediente no había sido

todavía resuelto por el Gobernador, esta Autoridad, cumpliendo lo mandado en la regla 3.ª de la propia Real disposición, se hallaba en el caso de prevenir al Ayuntamiento que no satisficiera cantidad alguna á D. Francisco Mitjana mientras la adquisición de los terrenos destinados á calles no fuese aprobada por ese Ministerio.

Sin este requisito no es posible reconocer validez alguna al contrato celebrado por el Ayuntamiento, y así las Secciones opinan que procede desestimar por extemporáneo el recurso de D. Pedro Manzanarés, y prevenir al Ayuntamiento que para adquirir los referidos terrenos necesita, con arreglo al art. 85, regla 3.ª, de la ley municipal, solicitar y obtener la autorización del Gobierno.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1880.

ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Gobernador de la provincia de Málaga.

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente promovido por D. Manuel Maestre Gonzalez contra una providencia de V. S., relativa á la venta de un terreno en Oreja de Sajambre, la Sección de Gobernación de dicho alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el recurso interpuesto por D. Manuel Maestre Gonzalez contra una providencia del Gobernador de Leon, que revocó el acuerdo del Ayuntamiento de Oreja de Sajambre, relativo á la venta de un terreno.

Habiendo solicitado varios vecinos de los pueblos de Soto, Vierdes y Pio ciertos terrenos para edificar, en el concepto de que eran sobrantes de la vía pública, el Ayuntamiento acordó que se tasaran y enajenaran en pública subasta; y verificada esta, adjudicó uno de ellos á D. Manuel Maestre Gonzalez, como mejor postor, en la cantidad de 187 pesetas, lo cual dió lugar á que otro vecino entablara reclamación ante el Gobernador de la provincia, quien de acuerdo con la Comisión provincial declaró nulo todo lo hecho por la corporación municipal, fundándose en que esta no se había ajustado á lo que dispone la legislación vigente.

En virtud de una resolución de la Dirección general de Administración local, que tenía por objeto averiguar si el terreno vendido era sobrante de la vía pública ó reunía otros caracteres, manifestó el Ayuntamiento que el acuerdo que tomó está dentro de las atribuciones que le concede la regla 1.ª del art. 85 de la ley municipal: que constituyendo el terreno un solar, y careciendo el pueblo de Vierdes de plano de alineación por tener menos de 18 vecinos, debe considerarse aquel como parcela no comprendida en la regla 3.ª del citado art. 85.

La Comisión provincial expuso á su vez que aun cuando de los antecedentes que se acompañan por el Ayuntamiento no se deduce á qué clase de terrenos pertenece el que se quiere enajenar, debe presumirse que es comunal, y que es nula la venta; porque ya se trate de un solar edificable, ya de una parcela, no se han cumplido las disposiciones de los Reales órdenes de 8 de Marzo de 1876, 17 de Abril de 1877 y 5 de Noviembre de 1878, que establecen que para que los Ayuntamientos puedan hacer uso de las facultades que les concede la regla 1.ª, art. 80 (hoy 85) de la ley municipal, debe preceder la declaración de terrenos sobrantes de la vía pública como resultado de la alineación practicada en las calles y plazas contiguas.

Según se deduce de lo expuesto, el terreno de que se trata se ha vendido en concepto de sobrante de la vía pública; pero no se ha tenido presente por el Ayuntamiento que para enajenarlo debió practicar antes la alineación de la calle á que pertenecía el solar, y anunciar en su caso la subasta en el *Boletín oficial* de la provincia, á tenor de lo establecido en la Real orden de 25 de Febrero de 1878, puesto que se trata de un solar.

En su consecuencia, la Sección entiende que debe desestimarse el recurso.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1880.

ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Gobernador de la provincia de Leon.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Tomás Guaps y otros vecinos de esa capital contra una providencia de V. S., relativa al ensanche de la calle de Caballeros, la Sección de Gobernación de ese alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: El Ayuntamiento de Valencia, á propues-

ta de la Comisión de policía urbana, acordó en 3 de Diciembre de 1877 dar mayor ensanche á la calle de Caballeros, en el trayecto que media entre la del Reloj Viejo y la plaza de San Bartolomé.

Expuesto al público el proyecto formado por el Arquitecto municipal, los dueños de varias casas comprendidas en dicho trayecto protestaron contra la variación, y pidieron que no se alterasen las líneas aprobadas por el Gobernador de la provincia en 12 de Octubre de 1857, ó que en otro caso se les expropiase legalmente, abonándoles desde luego el valor de sus fincas.

Desestimadas estas reclamaciones por la Corporación municipal, y aprobado definitivamente el proyecto de ensanche, se alzaron los interesados ante el Gobernador alegando que la reforma era inconveniente, y que con ella se les inferían grandes perjuicios, y solicitando que en último resultado no se llevase á cabo sin indemnizarles previa y debidamente.

El Gobernador, de acuerdo con el parecer de la Comisión provincial, declaró improcedente el recurso, dejando á salvo el derecho de los apelantes para pedir, en la vía y en la forma que creyeren convenientes, la indemnización de daños y perjuicios.

Fúndase esta resolución en que contra los acuerdos dictados por los Ayuntamientos en asuntos de su competencia sólo cabe recurso de alzada cuando contiene alguna infracción de ley, y en que el Ayuntamiento no se excedió de sus atribuciones ni faltó á precepto legal alguno al decidir la reforma de que se trata.

Al comunicar al Ayuntamiento esta resolución, el Gobernador le excitó á que procurase armonizar los intereses del Municipio con los de los particulares, y á que fuese llevando á efecto las mejoras proyectadas á medida que lo permitiesen los fondos municipales con objeto de evitar perjuicios de consideración.

No aquietándose algunos de los reclamantes, acuden á V. E. aduciendo extensas consideraciones con objeto de demostrar que el recurso era procedente, y que el Gobernador debió resolverlo en el fondo, á cuyo efecto solicitan que se devuelva el expediente á esta Autoridad.

La Sección, al emitir informe en cumplimiento de la Real orden de 30 de Abril último, entiende que no es posible acceder á la pretensión de los apelantes.

Ellos mismos reconocen que el acuerdo del Ayuntamiento resolviendo el ensanche de una parte de la calle de Caballeros recayó en materia de la exclusiva competencia de tal corporación; y como, según el art. 171 de la ley orgánica, contra los acuerdos de esta índole sólo cabe recurso de alzada ante el Gobernador cuando por ellos y en su forma se infrinjan algunas disposiciones de la propia ley ó de otras especiales, claro es que no son procedentes los que se entablan por otros motivos. La apelación presentada al Gobernador no se fundaba en que en el acuerdo se hubiese faltado á algún precepto legal, pues no puede admitirse la supuesta infracción de la ley de ensanche de poblaciones, una vez que esta no tiene aplicación á las obras ó reformas del interior de las mismas poblaciones, y por tanto no ofrece duda que estuvo en su lugar la providencia de dicha Autoridad; pues no habiéndose entablado el recurso con sujeción á lo dispuesto en el art. 171 de la ley municipal, no había llegado, conforme al párrafo segundo del art. 174, el caso de resolver el asunto en el fondo.

No existe, pues, á juicio de la Sección, razón alguna para dejar sin efecto lo resuelto por el Gobernador.

Sostienen los interesados que esta orden deja indefensos sus derechos de propiedad, que resultan grandemente perjudicados, porque aparte de que amenazados de desaparecer en todo ó en parte los edificios que poseen pierden desde luego en valor, el pago del importe del área que ocupan, que para en su día les ofrece el Ayuntamiento, no es bastante á resarcir tales perjuicios. Esta alegación es de todo infundada, puesto que el art. 172 de la ley orgánica determina clara y explícitamente el modo y ante quién tienen que acudir los particulares cuando juzguen que los Ayuntamientos han lesionado sus derechos privados; y de esta índole es, en caso de que exista, el perjuicio que el acuerdo de la Municipalidad puede haber inferido á los apelantes.

En resumen: opina la Sección que, dejando á salvo los derechos que los interesados crean que los asisten para que puedan hacerlos valer donde y ante quien vieren convenientes, procede mantener la resolución impugnada, y en su consecuencia desestimar la instancia.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver de conformidad con el mismo.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1880.

ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Gobernador de la provincia de Valencia.

MINISTERIO DE ESTADO.

REGLAMENTO DE SERVICIO INTERNACIONAL

ANEXO AL SERVICIO TELEGRÁFICO DE SAN PETERSBURGO.

REVISION DE LONDRES (1).

7.—TRANSMISION DE LOS TELEGRAMAS.

a.—SIGNOS PARA LA TRANSMISION.

XXVIII.

Los cuadros que figuran á continuacion indican las señales empleadas en el servicio de los aparatos Morse y Hughes.

A.—SIGNOS DEL APARATO MORSE.

LETRAS.

Table showing Morse code signals for letters a through z, with visual representations of dots and dashes.

DISTANCIAS DE LAS SEÑALES.

- 1.º Una línea es igual á tres puntos.
2.º El espacio entre las señales de una misma letra es igual á un punto.
3.º El espacio entre dos letras es igual á tres puntos.
4.º El espacio entre dos palabras es igual á cinco puntos.

CIFRAS.

Table showing Morse code signals for digits 1 through 0, with visual representations of dots and dashes.

Raya de quebrado.

Tambien se pueden emplear, para expresar las cifras, los signos siguientes, pero solamente en las repeticiones de oficio.

Table showing alternative Morse code signals for digits 1 through 0.

Raya de quebrado.

SIGNOS DE PUNTUACION Y OTROS.

Table showing Morse code signals for punctuation and other symbols like period, comma, question mark, etc.

INDICACIONES DE SERVICIO.

Table showing Morse code signals for service indications like telegram type, payment status, etc.

B.—SIGNOS DEL APARATO HUGHES

Letras.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Cifras.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.

Signos de puntuacion y demás.

Punto, coma, punto y coma, dos puntos, interrogacion, admiracion, apóstrofo, cruz+, guion, etc.

El espacio entre dos números se marcará con dos espacios en blanco. En la transmision ó colacion de un número fraccionario, no decimal, deben separarse por un espacio en blanco el número entero del numerador de la fraccion ordinaria que sigue.

A las palabras y frases subrayadas se las antepone y pospondrá dos guiones, por ejemplo: --sin tardanza--, y se subrayará á la mano por el funcionario de la estacion destinataria.

Indicaciones de servicio y signos convencionales.

Table mapping service indications and conventional signs to their Morse code equivalents (S, A, P, D, R, T, C, F, S, P, P, X, R, O).

Para llamar á la estacion con quien se comunica, ó para responderla, se empleará el blanco y la N, repetidos alternativamente. Para ajustar el sincronismo y pedir con tal objeto la repeticion prolongada del mismo signo, se usará una combinacion compuesta del blanco, la I y la T, producida tantas veces como sea necesaria.

Para pedir ó facilitar el ajuste del electro-iman se empleará una combinacion formada de los cuatro signos siguientes: el blanco, la I, la N y la T, repetidas tantas veces como sea necesario.

Para dar espera; la combinacion A T T, seguida de la duracion probable de la espera.

Para indicar un error; dos ó tres N consecutivas sin más signo de puntuacion.

Para interrumpir la transmision de la estacion correspondiente; dos ó tres letras cualesquiera convenientemente separadas.

Los acentos sobre la e se trazarán con pluma ó lápiz negro

al fin de las palabras (con ó sin s), y cuando son esenciales para el sentido; (ejemplo: Achète, Acheté.) En este último caso, el que trasmite repetirá la palabra despues de la firma, haciendo figurar la e acentuada, entre dos blancos, para llamar la atencion de la estacion que recibe. En lugar de ã, õ y ü se trasmibirá respectivamente ae, oe y ue.

b.—ORDEN DE TRANSMISION.

XXIX.

1. La transmision de los telegramas se verificará en el orden siguiente:

- a. Telegramas oficiales.
b. Telegramas de servicio.
c. Telegramas privados urgentes.
d. Telegramas privados no urgentes.

2. Toda estacion que reciba por un hilo internacional un telegrama presentado como telegrama oficial ó de servicio le reexpedirá como tal.

3. Los avisos de servicio procedentes de las diferentes estaciones, relativos á los incidentes de la transmision, circularán por la red internacional como telegramas de servicio.

XXX.

1. Principiada la transmision de un telegrama, no podrá interrumpirse para dar lugar á una comunicacion de categoría superior sino en caso de absoluta urgencia.

2. Los telegramas de la misma clase se transmitirán por la estacion de origen en el orden de su presentacion, y por las estaciones intermedias en el de su recepcion.

(1) Véase la GACETA de ayer.









